

sión de órdenes religiosas (290), destierro de obispos y de sacerdotes; de la "persecución iniciada en 1834" (278) y cita las palabras del nuncio Amat relativas a la "impía persecución" (376), así como la declaración del cardenal Bernetti "que la supresión de los jesuitas había demostrado al papa la guerra abierta que se hacía a la Iglesia española" (280).

La Introducción está firmada el 22 noviembre 1972, no sabemos si antes o después de redactada la obra. Lo cierto es que la bibliografía llega en ocasiones hasta 1974. Sin embargo, el *Diccionario de Historia eclesiástica de España*, publicado en 1972 con su largo estudio sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado y con biografías excelentes, como la de Cirilo Alameda, no aparece citado. Se menciona un artículo de don José María Mutiloa del año 1973, pero no su obra *La desamortización eclesiástica en Navarra*, editada en esta misma colección en 1972.

La obra ha sido editada con la misma pulcritud y esmero que los anteriores volúmenes de la *Colección Historia de la Iglesia* del Instituto de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra.

José GOÑI GAZTAMBIDE

Fernando de MEER LECHA-MARZO, *La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la II República española*, EUNSA, Pamplona 1975, 212 págs.

F. de Meer nos brinda en este estudio la sobriedad de su espíritu castellano, el amor al dato preciso de un científico de origen, el sereno análisis de quien no considera como cosa extraña y lejana la política religiosa de la II República.

Mérito principal de la obra es el ceñirse al período constituyente del régimen republicano. Y eso por dos motivos: porque el tema se hace abarcable; porque en síntesis se halla expresado ya desde ese momento toda la actitud anticlerical de los sectores que habían propiciado el nuevo orden político.

Acostumbrados a una historiografía partidista, o que gusta de interpretar con el manejo de escasas o excesivas fuentes, este estudio merece destacarse por el empleo equilibrado de la

documentación (Extracto de las Constituyentes, memorias de los políticos del momento, monografías), la fidelidad al método natural de la Ciencia Histórica: la cronología, la clara localización de las diversas corrientes ante el problema religioso.

Tiene el tema escogido el gran acierto de centrarse sobre algo nuclear en la II República: la cuestión religiosa. Recoge el autor, a modo de epílogo, unas palabras de Manuel Azaña que por su condición de protagonista son sumamente reveladoras. Palabras que adquieren especial relieve si se tiene en cuenta el temprano momento en que son dichas: tras la derrota electoral de 1933, en que se impusieron cedistas y radicales: "Cada vez que repaso los anales del Parlamento Constituyente y quiero discernir dónde se jugó el porvenir de la política republicana, mi pensamiento y mi memoria van, inexorablemente, a la ley de Congregaciones religiosas, el artículo 26 de la Constitución, a la política laica, a la neutralidad en la escuela, a todo lo que se ha derivado de bienes, de esperanzas y de rigores de justicia del principio asentado en la Constitución de la República, contra la cual se han desarrollado todas las maniobras visibles e invisibles que han sido capaces de suscitar una reacción contra nosotros para ver si nos hacían naufragar, y, por último, confesémoslo, nos han hecho naufragar".

Fue una Constitución sectaria, elaborada de espaldas a la realidad católica de España, con poco espíritu democrático —como no dejaron de reconocer los republicanos moderados— que tras conceder el derecho de asociación, de enseñanza, a todos los españoles, se lo negaba a los religiosos, tras la solemne declaración de principios constitucional según la cual la condición religiosa de los súbditos no limitaría el ejercicio de los derechos civiles.

Desde una perspectiva actual sorprende descubrir cómo la mayor parte de los republicanos consideraron como inviable la República si se concedía libertad a las congregaciones religiosas. Temían que a través de sus centros de enseñanza se difundiera una propaganda antirrepublicana. Desde el punto de vista doctrinal no existía semejante peligro: era común entre los católicos la defensa de la accidentalidad de las formas de gobierno. En el plano histórico no puede olvidarse la política de *ralliement*, de aceptación de la República preconizada en Francia por León XIII, o, en el caso de España, la constante

insistencia desde la época de Pío X en que los católicos españoles podían militar en partidos de inspiración democrática.

Pero como destaca acertadamente Fernando de Meer, el enfrentamiento se producía sustancialmente entre dos concepciones distintas de la sociedad. Una, la cristiana, que consideraba se debían sacar consecuencias sociales de la fe; otra, laicista, de raíz liberal pero compartida por los socialistas, en la que se recluyen las convicciones religiosas al ámbito de la intimidad. Semejante planteamiento, que hoy, en plena época del *compromiso* cristiano, puede extrañarnos, tenía por aquel entonces pleno vigor.

Muy significativa es la actitud del Episcopado español, que tuvo un ánimo de entendimiento, pacificador, estimulado por la Santa Sede. En ese sentido debe entenderse el relevo del cardenal Segura y la aceptación de los poderes constituidos. Incluso una vez concluida la elaboración del texto constitucional, contrario en tantos puntos al Magisterio de la Iglesia y al peso real del catolicismo en España, admira leer la *Declaración Colectiva del Episcopado Español* (20.XII.1931) por su tono mesurado cuando se ha producido una radical transformación en las relaciones Iglesia-Estado (aconfesionalidad del Estado, prevista expulsión de los jesuitas, limitaciones en el derecho de enseñanza, supresión del presupuesto de culto y clero, regulación civil del derecho de asociación religiosa). Dirán en semejante ocasión los obispos españoles:

“Con aquella lealtad, pues, que corresponde a un cristiano los católicos españoles acatarán el poder civil en la forma con que de hecho exista, y, dentro de la legalidad constituida, practicarán todos los derechos y deberes del buen ciudadano. Una distinción empero habrán de tener presente en su actuación: la importantísima distinción entre *poder constituido* y *legislación*. (...). La aceptación del primero no implica, por tanto, de ningún modo la conformidad, menos aún la obediencia, a la segunda en aquello que esté en oposición con la ley de Dios y de la Iglesia”.

Aceptar, pues, la República, pero no las leyes sectarias que negaban los derechos de la Iglesia. ¿Era ésta una actitud nueva? No, pues del mismo modo se había comportado durante la Restauración, invitando a colaborar a los fieles en el marco institucional que se les ofrecía, más propicio pero no en todo conforme con lo que debía ser una sociedad verdaderamente

cristiana. Así, procuró que integristas y tradicionalistas no se dejaran llevar de su catastrofismo, que los católicos no afectos a los partidos turnantes respetaran el derecho de otros fieles a militar en sus filas.

Es lógico que, como consecuencia de esa actitud intransigente, se oyeran desde los escaños donde se sentaban los diputados católicos amenazas de resistencia pasiva, advertencias de que se iba a abrir un nuevo período constituyente, claras alusiones a una posible guerra civil, cuando no se respetaba el sentimiento de tantos españoles para los cuales las convicciones religiosas debían tener secuelas en la regulación del orden social.

¿Cómo se había llegado a semejante radicalización? F. de Meer lo resume precisamente: "Había un punto de arranque. El catolicismo español no había dado una respuesta total de libertad religiosa para los sectores no ortodoxos de la sociedad española. De este hecho habían surgido años de lucha, perturbados por la incapacidad de los anticlericales de comprender la naturaleza de la Iglesia. A esto había que unir que a la solución de las fracturas sociales había contribuido poco la acción social de los católicos, al margen de los muchos y sinceros esfuerzos realizados. Por tanto en potentes núcleos de las masas trabajadoras no alentaban sentimientos de respeto a la Iglesia. La oportunidad de la Constitución de 1931 fue demasiado atrayente para un laicismo tan proclive a la revancha. Faltó quien realizase una serena reconsideración de la actitud anticlerical. Algunos intelectuales, hombres de paz y de concordia, se apartaron de la contienda: Alba, Ortega y Gasset, Rodríguez Pérez, García Valdecasas, Maraón..."

Pero así como en otras materias hubo capacidad de transacción (regiones, propiedad), no ocurrió así en la cuestión religiosa, como nos recuerda el propio de Meer: "El anticlericalismo se presentaba como la justificación última de una política revolucionaria. Problemas graves —p. e. la propiedad— habían encontrado una solución de compromiso, o habían quedado pendientes de solución. Mientras que, una actuación profundamente anticlerical, se ofrecía como hecho glorioso que paliaba el conservadurismo de las agrupaciones pretendidamente revolucionarias".

Es de esperar la aparición de nuevas monografías que, con serenidad propia del estudioso, sigan mostrando las raíces religiosas de la bipolarización de la II República que condujo a

las lamentables consecuencias de la guerra civil. El Dr. de Meer ha sabido expresar magníficamente cómo en las actitudes humanas pesan más las ideas que los intereses materiales, pues el optar por ellos no deja de ser una vulgar ideología.

Juan María GUASCH BORRAT

*Documentos colectivos del Episcopado Español, 1870-1974*, Edición completa, preparada por Jesús Iribarren, BAC, Madrid 1973, 558 págs.

El volumen que reúne los documentos colectivos del Episcopado español, de 1870 a 1973, es un noble esfuerzo editorial.

El trabajo ha sido efectuado por Jesús Iribarren. El autor ha realizado también un estudio introductorio (pp. 3-54). Ha situado cronológicamente los documentos y analizado la forma en que sucesivamente ha cristalizado la acción coordinada del magisterio episcopal. Los sucesivos estadios se integran como presupuestos históricos de la doctrina teológica de la colegialidad episcopal. La presentación es sobria, exacta y puntual en las referencias bibliográficas, y cada documento va precedido de una breve introducción. La presente colección documental no agota el magisterio episcopal de los obispos españoles. Este hecho no es deficiencia del trabajo, pero quede como aviso para el lector. La totalidad del magisterio episcopal no tenía lugar en un estudio como el que comentamos. Otro matiz: hubiera sido útil una mayor referencia a la doctrina del magisterio pontificio, en el estudio introductorio, pues los documentos del magisterio episcopal tienen su última consistencia en la enseñanza de los Papas. La homogeneidad de los desarrollos doctrinales sería así más patente, y el lector dispondría de más elementos de juicio para comprender lo temporal y lo permanente de la doctrina de la Iglesia.

El número de documentos reunidos es 69. Los temas tratados son: doctrina católica sobre el estatuto jurídico del matrimonio en la sociedad civil, régimen de la enseñanza de la religión en el ordenamiento nacional, congregaciones religiosas y ley de asociaciones civiles, moralidad pública, libertad de cultos, libertad religiosa, confesionalidad del Estado, y doctrina social de la Iglesia, etc.